

**|REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**  
**Medellín, veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitrés (2023)**

DEMANDANTE : ASTRID LORENA VALENCIA ARANGO  
DEMANDADOS : COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMÓN  
BOLÍVAR LTDA EN REORGANIZACIÓN  
TIPO DE PROCESO : ORDINARIO  
RADICADO NACIONAL: 05-001-31-05-019-2022-00301-01  
RADICADO INTERNO : 204-23  
DECISIÓN : CONFIRMA SENTENCIA  
ACTA NÚMERO : 222

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

**ANTECEDENTES**

La parte accionante solicita, se DECLARE que entre las partes existió un contrato de trabajo desde el 17 de noviembre de 2020 hasta el día 15 de julio de 2021 en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas; que el contrato de trabajo terminó sin justa causa comprobada por el empleador, por lo que le asiste el derecho a percibir la sanción por terminación del contrato de trabajo sin justa causa; que el demandado está en la obligación de la constitución del título pensional y consecuente pago del cálculo actuarial por el tiempo laborado y no cotizado al sistema general de seguridad social en pensiones dirigido a Porvenir S.A.; y se declare que el demandado adeuda la comisión por venta, constitutiva de salario.

Se CONDENE a reconocer y pagar la indemnización por terminación del contrato de trabajo sin justa causa; a pagar la comisión por venta constitutiva de salario equivalente al 1% de la facturación del mes de febrero de 2021 con la sociedad Muñoz y Herrera Ingenieros Asociados, de acuerdo al hecho décimo cuarto de la demanda; al pago de las prestaciones sociales causadas durante toda la relación laboral y no pagadas; se condene a reconocer y pagar el descanso obligatorio de las vacaciones causadas durante toda la relación laboral y no pagadas; al pago de la indemnización moratoria del artículo 65 del CST; al pago de la sanción por el no pago del auxilio de cesantía e interés al auxilio a la cesantía conforme el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990; la indexación de las condenas; y las costas procesales.

Como supuestos fácticos con los que sustenta sus pretensiones, expuso que la Sra. Astrid Lorena Valencia Arango, prestó servicios en forma subordinada a la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMÓN BOLÍVAR LTDA EN REORGANIZACIÓN mediante la celebración de un falso contrato de prestación de servicios, iniciando sus labores el 17 de noviembre de 2020; desempeñó sus funciones en las instalaciones de la empresa en el Centro Comercial Obelisco; el objeto social de la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMÓN BOLÍVAR LTDA EN REORGANIZACIÓN es prestar servicios de seguridad y vigilancia privada y servicios de escolta; la demandante cumplía las funciones propias de un cargo gerencial al servicio del empleador demandado, esto es, los denominados como de confianza y manejo, siendo sus principales tareas: los procesos de contratación de nuevos colaboradores, consecución de nuevos clientes, supervisora operativa de los puestos de trabajo, informes para pago de nómina de los colaboradores, recibir uniformes de los colaboradores y entregar uniformes a los mismos, realizaba reportes diarios a la Fiscalía General de la Nación de conformidad con los requerimientos que realizara esta entidad, informes operativos de las novedades que se presentaran en los puestos de trabajo y con los colaboradores, realizar informes del sistema de SGSST.

El horario de trabajo asignado era de lunes a viernes de 8:00 am a 6 pm, sábados, domingos y festivos debía pasar y hacer revisión a los distintos puestos de trabajo, sin tener un descanso compensatorio completo a la semana; la demandante no contaba con un descanso a la semana, toda vez

que su empleador no contaba con suficiente personal de supervisión que pasara "revista" y la demandante con la finalidad de cumplir con sus funciones y dar descanso al único supervisor que estaba contratado, realizaba la "revista" los días sábados, domingos y festivos.

La remuneración salarial pactada era de \$1'800.000, y para el pago de esta remuneración se le exigía a la accionante presentar el pago de seguridad social, y posteriormente presentar cuenta de cobro; durante la relación laboral no le fueron canceladas las vacaciones ni las prestaciones sociales.

La labor era prestada de forma personal, pues no tenía la posibilidad de enviar a otra persona a cumplir sus funciones, que le era exigible el cumplimiento del horario por parte de su empleador, y sus tareas diarias eran determinadas por orden directa de los señores William Restrepo y Vivian Torres; los implementos de trabajo (computador, silla, escritorio, implementos ofimáticos como lapiceros y papelería) eran suministrados por el empleador; a la actora le fue asignado un correo electrónico institucional y portaba carnet que la identificaba como empleada al servicio de COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMÓN BOLÍVAR LTDA EN REORGANIZACIÓN, suministrado igualmente por el empleador; la demandante prestó el servicio de forma exclusiva a favor del empleador demandado.

Debido a que una de las funciones era la consecución de nuevos clientes, se presentó una licitación para prestar servicios de seguridad privada a la sociedad Muñoz y Herrera Ingenieros Asociados; el proceso licitatorio fue exitoso, y el empleador empezó prestarle servicios de seguridad privada a dicha sociedad a partir del 4 de febrero de 2021. De conformidad con los correos electrónicos y conversaciones vía WhatsApp que sostuvo la accionante con el Sr. William Restrepo, se pactó sobre el valor de la primera factura que fuese cobrada a la sociedad Muñoz y Herrera Ingenieros Asociados, se pagaría como comisión a favor de la demandante, el valor del 1% sobre la primera factura, la cual correspondía a la del mes de febrero de 2021; la sociedad Muñoz y Herrera no pago de manera cumplida la facturación a la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMÓN BOLÍVAR LTDA EN REORGANIZACIÓN, y adeuda las facturas cobradas de los meses de febrero a abril de 2021; dicha situación le generó conflictos con su empleador, en especial con la Sra. Vivian Torres, la cual le

decía que debía pagar los valores dejados de facturar y le exigía conseguir un nuevo contrato para compensar las pérdidas por el incumplimiento de la sociedad Muñoz y Herrera Ingenieros Asociados.

Debido al incumplimiento en el pago por parte de la sociedad Muñoz y Herrera Ingenieros Asociados, se inició un constante acoso laboral en cabeza de la Sra. Vivian Torres, porque además de manifestarle que debía pagar los valores dejados de facturar, le exigía que debía conseguir un nuevo contrato para compensar las pérdidas presentadas por el incumplimiento de la sociedad Muñoz y Herrera. La sociedad accionada le informó el 8 de julio de 2021 que su contrato iba a ser cancelado de manera unilateral a partir del 15 de julio de 2021; a la terminación del contrato no le cancelaron prestaciones sociales, ni vacaciones causadas durante la vigencia del contrato laboral.

### **CONTESTACIONES A LA DEMANDA**

**La COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMÓN BOLÍVAR LTDA EN REORGANIZACIÓN al dar contestación a la demanda** aceptó el objeto social de la accionada; que el proceso licitatorio para que la accionada le prestara el servicio de vigilancia a la sociedad Muñoz y Herrera Ingenieros Asociados fue exitoso, y el empleador empezó prestarle servicios de seguridad privada; dentro del desarrollo del contrato, la demandante estaba la función de conseguir nuevos puestos de trabajo o clientes; y al momento de la terminación del contrato a la accionante no le fueron canceladas las prestaciones sociales ni vacaciones porque se tratada de un contrato de prestación de servicios, y la demandante no era trabajadora de la empresa, ejercía asesoría comercial a la empresa de manera independiente, no tenía subordinación y tampoco tenía establecido un horario. Frente los demás hechos de la demanda, señala que no son ciertos. Se opuso a cada una de las pretensiones de la demanda. Propuso como excepciones fondo de inexistencia de la obligación, que se pretende cobrar; falta de causa; pago de lo no debido; buena fe del demandado; prescripción de la acción; innominada o genérica; no configuración de contrato realidad.

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

En sentencia del 26 de junio de 2023, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito, DECLARÓ que entre demandante y la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMÓN BOLÍVAR LTDA EN REORGANIZACIÓN, existió un contrato de trabajo a término indefinido, que se prolongó entre el 17 de noviembre de 2020 y el 15 de julio de 2021, y fue terminado en forma unilateral y sin justa causa por parte del empleador.

CONDENÓ a la sociedad la demandada a reconocer y pagar a la Sra. Astrid Lorena Valencia Arango la suma de \$1.800.000 como indemnización por despido sin justa causa; \$597.500 en razón a vacaciones. Valores que deben ser cancelados en forma indexada, teniendo en cuenta el IPC certificado por el DANE y la formula  $VA = VH \times IPC \text{ FINAL} / IPC \text{ INICIAL}$ ; condenó a la accionada a reconocer y pagar a la demandante:

- \$1.195.000 en razón a auxilio de cesantía,
- \$66.602 por intereses a la cesantía,
- \$1.195.000 por prima de servicios,
- \$3.227 como sanción por no pago oportuno de intereses a la cesantía año 2020,
- \$9.000.000 como sanción por no consignación del auxilio de cesantía año 2020 y la suma diaria de \$60.000 desde el 16 de julio de 2021 y por un periodo máximo de 24 meses, y a partir del mes 25 deberá cancelar intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera, hasta cuando el pago de las prestaciones sociales adeudadas se verifique.

Condenó a la demandada a cancelar los aportes a la seguridad social en pensiones respecto de la demandante, a través de cálculo actuarial, en el fondo de pensiones al que se encuentre vinculada, por el periodo comprendido entre el 17 de noviembre de 2020 y el 15 de julio de 2021, con un ingreso base de cotización de \$1.800.000. Preciso que le corresponde a la AFP a la que pertenezca la demandante, proceder con la liquidación del cálculo actuarial en los términos antes descritos, para que la demandada proceda con el cumplimiento de la obligación.

ABSOLVIÓ a la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMÓN BOLÍVAR LTDA EN REORGANIZACIÓN de las restantes

pretensiones incoadas en su contra por Astrid Lorena Valencia Arango.  
Condenó en costas a la demandada.

## IMPUGNACIÓN

**La apoderada de la parte demandada** solicita la revocatoria de la sentencia aduciendo que no se tuvo en cuenta que para la celebración del contrato de prestación de servicios existió una voluntad de las partes, así mismo, que nunca se desconoció o se desdibujó la naturaleza del contrato civil, en vista que la misma demandante dijo, que ella era consciente y en su experiencia comercial sabía lo que era firmar un contrato de prestación de servicios. Señala que se encuentra probado que la demandante desarrolló una actividad comercial y nunca ejerció labores administrativas ni operativas porque no tenía el perfil para ejercer ese tipo de actividades; no se demostró que la procedencia de los formatos, ni se demostró las actividades administrativas u operativas pretendidas y la accionada la requería, para que mensualmente le presentara informe con la parte comercial que ella asumía.

Sostiene que el suministro de instalaciones, no genera la existencia de un contrato de trabajo, a la luz de lo señalado en sentencia del 27 de febrero de 2007 que estableció "...nada se opone a que un contrato distinto del laboral se le entregue al contratista elementos o se le permita el uso de locales con miras a cumplir el objetivo contractual convenido, lo cual conlleva a inferir que tales circunstancias no puede ser tomadas como signos distintivos de la subordinación, sino, son apenas actividades inherentes al normal desenvolvimiento de la actividad para la cual fueron contratados", lo que se reiteró en las sentencias con radicado 29.438 del 25 de mayo del mismo año y 38.540 del 2010; que la demandante tenía acceso a la oficina sin que por ello se pueda decir que tuviera horario; no se demostró la existencia de ordenes por parte de la gerencia general, subgerencia o coordinación jurídica; considera que se debe partir de la buena fe del actuar de la accionada en tanto, no se le adeudan honorarios. Frente a la generación de informes, se remite a la sentencia 13.020 de 2017 de la que resalta que la generación de instrucciones para el desarrollo de actividades, coordinación de horario, solicitud de informes, no implican una subordinación siempre y cuando se conserve la independencia y la autonomía del contratista.

Solicita se absuelva a la demandada ya que en todo momento la empresa actuó de buena fe con la demandante; que se trata de una empresa en reorganización empresarial.

Finalmente sostiene que su representada no tiene el alcance económico para asumir las sanciones moratorias y por eso siempre se trató de tener las obligaciones de los derivados de estos contratos civiles al día. Solicita se absuelva a la demandada en la instancia teniendo en cuenta el comportamiento que se demostró en el proceso por parte del representante legal y la jefe de talento humano de la accionada.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

La apoderada de la parte demandante presentó alegatos de conclusión manifestando lo siguiente:

“El reparo contra la sentencia se basa en que la misma desconoció la **naturaleza jurídica** del contrato de prestación de servicios suscrito por las partes, en la cual de manera voluntaria las partes aceptaron de cómo se desarrollaría este contrato, es decir sobre la base de una asesoría comercial. Es así como la señora Astrid Valencia presentaba mensualmente sus aportes parafiscales, cuentas de cobro e informe de la gestión comercial que realizaba.

Lo anterior se sustenta en acervo probatorio documental y corroborado por la jefe de talento humano Lily Martínez quien en su testimonio confirma la relación que se tuvo con la señora ASTRID VALENCIA.

2. Se desconoció por parte del juzgador, la **buena fe** con la que actuó la empresa en el entendido que nunca cambio las condiciones con al que la señora ASTRID VALENCIA, ejecuto su labor de asesoría. Ella actuó de manera independiente, sin horarios, sin subordinación. Tanto es así que el señor Valencia continuamente se encontraba por fuera de Medellín, nunca se probó algún tipo de horario y mucho menos algún tipo de orden. NO EXISTE prueba alguna que lleve al juzgador pensar que si existió estos elementos. El concluye y le da fuerza a que existió un contrato realidad sin realmente dar valor a las pruebas allegadas al proceso”.

### **PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO**

El problema jurídico en esta instancia se centrará en determinar: i) Si entre las partes realmente se celebró un contrato de prestación de servicios y no se configuró la existencia de un contrato de trabajo; ii) Si hay lugar a revocar la sanción moratoria impuesta a la accionada.

#### **1. De la relación laboral**

En primera instancia se declaró la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre las partes, por considerar el A Quo, que con base en la prueba arrojada al proceso se demostró, que la Sra. Astrid Lorena Valencia Arango fungía como representante de la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMÓN BOLÍVAR LTDA EN REORGANIZACIÓN en la Regional Antioquia, sus labores no se enmarcaban exclusivamente en el área comercial y desarrollaba labores propias del objeto social de la demandada; así mismo resaltó la existencia de la imposición de exclusividad de la demandante, lo cual no es propia de un contrato de prestación de servicios.

Pues bien, en lo que respecta al requisito establecido en el artículo 23 del C. S. de T. subrogado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990, se tiene que, para que exista contrato de trabajo se debe acreditar 1) “La actividad personal del trabajador”, 2) “La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador”, y 3) “Un salario como retribución del servicio”.

Por ende, es la parte demandante la que tiene la carga probatoria según lo establecido en los artículos 164 y 167 del C.G.P, de demostrar la prestación personal del servicio con el empleador demandado y que, por ello, recibió una remuneración, además de los extremos temporales de la relación; tal y como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 5453 de 2018. Una vez probada la prestación personal del servicio nos encontramos ante la presunción del artículo 24 del C.S.T, el cual establece la presunción de que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, debiendo de esta forma la parte demandada desvirtuar la subordinación para efectos de desacreditar dicha presunción, tal y como se ha expuesto por la jurisprudencia entre otras en sentencias 42167 del 2012, SL 878 de 2013, SL 6868 de 2017 y SL 1905 de 2018, y recientemente la sentencia SL 3847 de 2021 señaló la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:

*“Esta Sala, en sentencia CSJ SL2879-2019, reiterando lo señalado en providencia CSJ, 24 abr. 2012, rad. 39600, sobre este aspecto, se puntualizó:*

*«...De lo anterior se extrae que probada la prestación personal del servicio, la subordinación se presume.*

*(...)*

*Si el demandado acepta la prestación del servicio, pero excepciona*



*que lo fue mediante un contrato civil, como sucedió en el sub lite, le allana el camino el demandante para ubicarse en el supuesto de hecho contenido en el artículo 24 del CST y ampararse en la presunción de que se trató de un contrato laboral. En cuyo evento, **el demandado tiene a su cargo desvirtuar la presunción mediante pruebas que demuestren, con certeza, el hecho contrario del elemento de la subordinación**, es decir que la prestación personal del servicio se dio de manera independiente.*

*En este caso el juez debe proceder al análisis probatorio teniendo en cuenta, como lo ha dicho de antaño la jurisprudencia, "...que no ha sido extraño para la jurisprudencia y la doctrina que en muchas ocasiones se pretende desconocer el contrato de trabajo, debiéndose acudir por el Juzgador al análisis de las situaciones objetivas presentadas durante la relación, averiguando por todas las circunstancias que rodearon la actividad desarrollada desde su iniciación, **teniendo en cuenta la forma como se dio el acuerdo de voluntades, la naturaleza de la institución como tal, si el empleador o institución a través de sus directivos daba órdenes perentorias al operario y como las cumplía, el salario acordado, la forma de pago, cuáles derechos se reconocían, cuál horario se agotaba o debía cumplirse, la conducta asumida por las partes en la ejecución del contrato etc.**, para de allí deducir el contrato real, que según el principio de la primacía de la realidad, cuando hay discordia entre lo que se ocurre en la práctica y lo que surge de documentos y acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos.*

***Quiere decir lo anterior que la relación de trabajo no depende necesariamente de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentra colocado. Es por ello que la jurisprudencia y la doctrina a la luz del artículo 53 de la Carta Política, se orientan a que la aplicación del derecho del trabajo dependa cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuando de una situación objetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento aparecen circunstancias claras y reales, suficientes para contrarrestar las estipulaciones pactadas por las partes, por no corresponder a la realidad presentada durante el desarrollo del acto jurídico laboral. (...)*** (Resalto de la Sala)

Aunado a lo anterior, la Corte Suprema de Justicia también ha dado aplicación a los indicios contemplados en la Recomendación 198 de la OIT, a efecto de determinar la existencia de relaciones laborales que se traten de ocular. Dichos indicios se recopilaron en la sentencia SL 1489 de 2023, en donde se señaló lo siguiente:

*"Al respecto, la Corte ha reconocido que en las relaciones de trabajo pueden presentarse casos dudosos o ambiguos en los que es más complejo determinar si en realidad existió una relación de trabajo. Justamente por ello ha acudido a la recomendación en mención como acertadamente lo hizo el Tribunal, dado que **compila una serie de indicios que permiten examinar la relación laboral desde un contexto más amplio y determinar con meridiana certeza si entre***

***las partes existió una relación laboral encubierta (CSJ SL2885-2019, CSJ SL4479-2020, CSJ SL5042-2020 y CSJ SL1439-2021). Precisamente en esta última providencia la Corte compiló varios de estos indicios de la siguiente manera:***

*(...) la prestación del servicio según el control y supervisión de otra persona (CSJ SL4479-2020); la exclusividad (CSJ SL460-2021); la disponibilidad del trabajador (CSJ SL2585-2019); la concesión de vacaciones (CSJ SL6621-2017); la aplicación de sanciones disciplinarias (CSJ SL2555-2015); cierta continuidad del trabajo (CSJ SL981-2019); el cumplimiento de una jornada u horario de trabajo (CSJ SL981-2019); realización del trabajo en los locales o lugares definidos por el del beneficiario del servicio (CSJ SL4344-2020); el suministro de herramientas y materiales (CSJ SL981-2019); el hecho de que exista un solo beneficiario de los servicios (CSJ SL4479-2020); el desempeño de un cargo en la estructura empresarial (SL, 24 pag. 2010, rad. 34393); la terminación libre del contrato (CSJ SL6621-2017) y la integración del trabajador en la organización de la empresa (CSJ SL4479-2020 y CSJ SL5042-2020) (...).” (Resalto fuera del texto)*

Centrándonos en el caso objeto de estudio, al analizar la prueba aportada al plenario, se encuentra que, entre la Sra. Astrid Lorena Valencia Arango y la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMÓN BOLÍVAR LTDA EN REORGANIZACIÓN se celebró un contrato de prestación de servicios del 17 de noviembre de 2020 al 17 de mayo de 2021(fl. 19 expediente digital 02); la demandante aportó documentos denominados “formato de novedades de turno agencias” e informes de gestión comercial y administrativa (fls. 49 a 143); en comunicación del 9 de julio de 2021, la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMÓN BOLÍVAR LTDA EN REORGANIZACIÓN le informó a la demandante la terminación del contrato de prestación de servicios, a partir del 15 de julio de 2021 (fl. 145); documento denominado “entrega oficina Seguridad Bolívar” (fl. 144).

De la prueba relacionada se evidencia, que el demandante prestó los servicios para la sociedad demandada, por lo tanto, se entrará a analizar si las COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMÓN BOLÍVAR LTDA EN REORGANIZACIÓN logra desvirtuar la subordinación y si se logran desvirtuar la existencia de indicios de que lleven a determinar el desarrollo de un contrato de trabajo y no de un contrato de prestación de servicios.

Respecto a este elemento esencial del contrato, en su más moderno significado, se ha entendido que es una potestad del empleador de someter al trabajador *“a la esfera organicista, rectora y disciplinaria de la empresa”* (Tomás Sala Franco, Derecho del Trabajo, 8ed., 1994, pág. 181), y como tal se deduce, en las más de las veces, de actos que implican el ejercicio real de estas potestades; y en palabras de la Sala Laboral de la CSJ, la subordinación *“se expresa a través de tres potestades del empleador: la directriz, la reglamentaria y la disciplinaria”* (Rad. 8476; sent. del 24 de octubre de 1996 -resalta la Sala-).

El concepto de subordinación es explicado por el legislador en el literal b) del artículo 23 del CST, como la facultad que tiene el empleador de exigir al trabajador el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos. Está prerrogativa debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. En palabras de la Corte Suprema, Sala Laboral, la subordinación es el elemento diferenciador entre el contrato de trabajo y otros acuerdos convencionales, por cuanto en el primero el empleador determina elementos como: la jornada de trabajo, el salario e imparte órdenes en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo.

Visto lo anterior, se encuentra como prueba documental la siguiente:

1º) Las partes celebraron contrato de prestación de servicios del 17 de noviembre de 2020 al 17 de mayo de 2021, en el cual se determinaron como obligaciones de la demandante las de: “administrar y controlar los procesos de negociación y venta de servicios, que permitan acceder a oportunidades de negocios y cerrar ventas en condiciones económicas favorables para la organización; coordinar y efectuar visitas comerciales a clientes; elaborar las cotizaciones de acuerdo con los servicios solicitados por el cliente; preparar la información de mercadeo según los requerimientos de los clientes; elaborar certificaciones comerciales cuando se requieran; gestionar las actividades de mercadeo y publicidad; definir y gestionar estrategias de consecución de clientes; crear base de datos de los posibles clientes que nuestra empresa puede prestar los servicios de Seguridad Privada; realizar seguimiento de las propuestas entregadas; presentar propuestas de los servicios de vigilancia y seguridad privada que ofrece la empresa para aumentar la posibilidad de conseguir nuevos clientes; desarrollar estrategias

de análisis de mercado y "benchmarking" con el objeto de diversificar los servicios de la compañía en el sector de la vigilancia y la seguridad privada, implementando nuevas alternativas de negocio; realizar la renegociación según sea el caso para renovar el contrato; elaborar los contratos de los clientes; brindar asesoría y atención al cliente; proponer planes de acción para el mejoramiento de los procesos en cuanto al área comercial de la organización; renovar el contrato; consulta semanal de oportunidades de licitación para la empresa en páginas web e informar al Gerente General; asumir y ejecutar las demás funciones que le sean asignadas en cumplimiento de la misión del cargo; las demás que por la naturaleza de los servicios contratados correspondan al desempeño como profesional a cargo de la dirección regional (fls. 19 y 20 del expediente digital 02).

2º) Con la demanda se aportaron "formato de novedades de turno agencias" de los que se extraen que la demandante reportaba: el lugar del servicio, el horario de ingreso y de salida y la novedad correspondiente. De algunos de dichos formatos se resalta:

- Que el 19 de mayo de 2021, la demandante plasmó que no tenía conocimiento que debía al estar en la oficina debía enviar el formato, pero a partir de dicha fecha, por instrucción del Sr. Ovalle, entregaría los formatos (fl. 49).
- En la novedad del 20 de mayo de 2021 informó como puesto Santa María del Mar, en el horario de 6:50 a 10:00 en donde se realizó la entrega de radio de la fiscalía, inducción a guardas, y reunión con el administrador, y de 11:30 a 16:20 el puesto era la oficina (fl. 50).
- El 25 de mayo de 2021 se informó como puesto Edificio Santa María del Mar, en el horario de 8:30 a 9:30 en donde se realizó "revista entrega de minutas vehiculares", puesto Comfenalco de 10:00 a 11:00 para el trámite de afiliación nueva guarda y puesto oficina de 11:00 a 14:40 (fl. 52);
- En formato del 28 de mayo de 2021 informó que el puesto era Mall 90 de 7:40 a 8:30 por entrega de propuesta, puesto oficina de 8:50 a 11:00 por cierre del centro comercial a las 11:00 am, puesto trabajo en casa de 11:20 a 17:00 por cierre del centro comercial a las 11:00am (fl. 56);

- Formato del 2 de junio de 2021 puesto Mall 90 en el horario de 8:30 a 10:00, en donde la novedad era “reunión con el administrador” y en la oficina el horario fue de 10:30 a 17:00 en gestión comercial (fl. 65);
- Formato del 4 de junio de 2021 se reportó como puesto, el Edificio Santa María del Mar de 9:00 a 11:30 donde se hizo revista de supervisión, esperó al administrador sin que éste llegara, de 12: a 1:00 el puesto fue el centro comercial Punto de la Oriental para entrega de portafolio y de 2:30 a 4:00 en el centro comercial Singapur del Hueco para reunión con la administradora (fl. 66)
- Formatos del 6 y 12 de junio de 2021 reportó como puesto, el Edificio Santa María del Mar de 6:40 a 7:30 (en la primera fecha) y de 15:40 a 16:38 (en la segunda fecha) plasmando como novedad “revista” (fls. 68 y 72);
- En el formato del 9 de julio de 2021, reportó como puesto el Edificio Santa María del Mar en horario diurno, reportando como novedad “revista supervisión” y puesto en oficina realizando gestión administrativa (fl. 60);
- En formato del 14 de julio de 2021 reportó como puesto el Edificio Santa María del Mar en donde se hizo “revista de supervisión entrega de apellidos y recomendaciones médicas) y en el puesto de oficina, se realizó gestión administrativa (fl. 61)

3º) La demandante aportó informes de gestión comercial y administrativa, realizados en los periodos de noviembre de 2020 a julio de 2021 (fls. 77 a 143).

Como prueba testimonial, el **Sr. Erlinson Flores Ayala** en su declaración rendida informó que conoce a la demandante porque ella fue la jefe en la empresa de Seguridad Bolívar y en esa oportunidad el testigo se desempeñaba como guardia de seguridad; asegura que la demandante fue su jefe inmediata; dentro de las labores que desempeñaba la accionante asegura que cualquier día de la semana o fines de semana pasaba revista del puesto, lo llamaba para que le diera novedades, si había que hacer inducción la accionante le informaba y él se encargaba de enseñarle a los compañeros nuevos; la oficina del trabajo de la demandante quedaba en el Centro Comercial Obelisco y en esa oficina la demandante trabajaba sola; si el testigo requería un permiso o hacer una consulta, lo hacía a la Sra. Astrid Lorena Valencia Arango; asegura que ellos tuvieron como

supervisores a Esteban, Jorge, John y Álvaro, cuando esos supervisores no iban, la demandante era el reemplazo y ella les pasaba revista, firmaba la minuta y en caso de alguna novedad se lo comentaban a ella; cuando el testigo ingreso a trabajar a la sociedad Seguros Bolívar su jefe inmediato era John y cuando lo pasaron a donde labora, como jefe inmediata llegó al demandante; sostiene que la demandante tenía horario de la oficina y generalmente cuándo era en jornadas en la noche o a la madrugada, la demandante lo llamaba por si debía reportar alguna novedad, pero señala que le consta el horario de la demandante porque en una oportunidad fue a llevarle la carta de renuncia; que en caso de haber una novedad en la noche, el demandante se debía comunicar con la demandante; el testigo identifica a la demandante como la que tenía el alto mando en la sede de Medellín; el testigo inicialmente trabajo en la Universidad Distrital y en la actualidad trabaja y le hicieron el empalme en el Edificio Santa María del Mar; manifiesta que la demandante tenía identificación de la empresa como Gerente; cuando la demandante llegaba al puesto de trabajo en ocasiones a las 5:30 de la mañana ella se identificaba como la Gerente de Medellín y la jefe inmediata y ella se ponía a disposición en caso de requerirla; el primer supervisor era el Sr. John Echavarría y en una oportunidad ese supervisor le informó, que había llegado la nueva jefe principal e iba a estar encargada de ellos; dice que la demandante usaba carnet de la empresa pero no utilizaba uniforme; el testigo fue a la oficina de la empresa a renunciar y allá habló con la demandante; no estuvo presente en reuniones donde la demandante recibiera órdenes; dice que conoce información de las funciones y la prestación de servicios de la demandante porque los supervisores le contaban y porque cuando no se podía comunicar con los supervisores, la comunicación era con la actora; aclara el testigo que se tenía que comunicar para todo con la Sra. Astrid Lorena Valencia Arango.

Declaración a la cual también se le da credibilidad, por encontrarse acorde con lo acreditado con la prueba documental y por ser un testigo que presencié las funciones que ejecutaba demandante en relación frente al puesto de trabajo por él desempeñado – guardia de seguridad. Si bien es cierto, este testigo no hace referencia al horario de trabajo ni a las órdenes recibidas por la Sra. Astrid Lorena Valencia Arango, fue claro, coherente y expresó la razón del dicho, al manifestar que la demandante era la encargada de la labor por él desempeñada, la demandante en la madrugada pasaba ronda, se presentaba como su jefe inmediata y así la reconocía el

testigo, cualquier duda o novedad era reportada a la Sra. Astrid Lorena Valencia Arango, los permisos se los solicitaba a la demandante, y el contacto que tenía con la empresa era porque se dirigía a la demandante.

Por su parte, la testigo de la sociedad demandada, **Sra. Lily Martínez Triana** (Jefe de Departamento de Talento Humano), quien manifestó que la demandante fue asesora comercial en Medellín; las labores de la demandante era ir a los diferentes puntos, conseguir contratos; dijo que la demandante enviaba cuentas de cobro con algunos informes a la Gerencia de las actividades que desarrollaba, y no realizaba actividades administrativas; la sociedad tenía una oficina en Medellín en donde iba la demandante a trabajar ocasionalmente, al igual que el supervisor que tenían; que los temas del personal se manejaban en Bogotá y la parte operativa lo centralizaban en Bogotá; la demandante no cumplía horarios porque su contrato era de prestación de servicios; el supervisor John Echavarría era el que atendía lo que pasaba con los puestos y lo que él no resolvía se escalaba al jefe de operaciones de Bogotá; cuando el supervisor John Echavarría tenía descansos tenían un relevante que lo cubría y en vacaciones se contrataba una persona para su remplazo; el relevante líder era mismo pero no recuerda el nombre; la demandante no pasaba revista o cubría puestos de trabajo porque tenía el cargo de asesora comercial; las novedades de las jornada de los guardas de seguridad se hace por medio de la central de monitoreo; cuando la demandante conseguía el cliente la relación continuaba entre el cliente y el Director de Operaciones y el supervisor; la demandante presentaba informes mensualmente a la Gerencia y al área contable; expuso que con la demandante se realizó un contrato de prestación de servicios por un inconveniente legal y una situación familiar que no le permitía ser contratada con el Estado; ni Gerencia ni Talento Humano realizó llamados de atención por los informes presentados por la demandante; a la demandante no se le exigía el diligenciamiento de los formatos de novedades para la agencia porque las novedades las llevaba la central de monitoreo y desde Bogotá se llama a todas las agencias y se solicitan novedades; la demandante nunca diligenció los formatos de novedades porque eso hace parte del Departamento de Operaciones; la demandante iba a la oficina cuando necesitaba hacer algo referente a la empresa y para hacer los informes y los implementos de trabajo que hay en esa oficina son de Seguridad Bolívar; en los años 2017 a 2020 la testigo visito la oficina de Medellín 2 o 3 veces; la

demandante tenía contacto en su ejecución de labores, con el Coronel William Restrepo Espinoza que es el representante legal, con la Doctora Vivian Andrea Torres que es la Gerente Jurídica y la comunicación que tenían, asume que era porque la demandante presentaba ofertas de servicio de vigilancia; asume que la demandante podía prestar servicios a otra empresa de vigilancia porque tenía un contrato de prestación de servicios, pero eso no le consta; no sabe si la demandante podía delegar sus servicios en otra persona porque desconoce las obligaciones que tenía; cree que la demandante manejaba un correo de la empresa; cree que a la demandante no le entregaron carnet porque este solo se le entregan a los trabajadores de la empresa.

De esta declaración se resalta, que se trata de una testigo que trabaja en la sucursal de la ciudad de Bogotá y visitó la oficina de la ciudad de Medellín solo 2 o 3 oportunidades, no obstante, lo anterior, afirma que la demandante iba a la oficina a trabajar ocasionalmente y no cumplía horarios, aspectos que no pudo haber presenciado en forma personal y directa. Manifestó la testigo que la demandante no realizaba la ronda ni remplazó al supervisor, porque existía un relevante líder, sin embargo no recordó el nombre de quien ejercía dicha labor; aseguró que a la demandante no se le exigía el diligenciamiento de los “formatos de novedades para la agencia” porque eso hace parte del Departamento de Operaciones, sin embargo obra prueba en el plenario que la demandante los diligenció; y mientras esta testigo asegura que la demandante presentaba informes a la Gerencia contradictoriamente el representante legal de la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMÓN BOLÍVAR LTDA EN REORGANIZACIÓN negó haberlos recibido.

Así las cosas, si bien es cierto que entre la Sra. Astrid Lorena Valencia Arango y la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMÓN BOLÍVAR LTDA EN REORGANIZACIÓN se celebró un contrato de prestación de servicios para desempeñar netamente labores comerciales, no se puede pasar por alto que, con la prueba aportada y practicada al plenario, se logran evidenciar la existencia de un verdadero contrato de trabajo y no un contrato civil de prestación de servicios. Las pruebas de las que se deriva esta conclusión son las siguientes:



- La demandante fue contratada para realizar labores comerciales, no obstante, en el desempeño de sus funciones, ejerció labores diferentes a las contratadas, tales como, "realizar ronda o pasar revista" al puesto de trabajo del Sr. Erlinson Flores Ayala, el cual desempeñaba la labor de guardia de seguridad; la demandante recibía las novedades reportadas por el testigo y era a ella a quien le pedía permisos el testigo. Y en ese sentido, el seguimiento al puesto de trabajo que la demandante realizaba en el Edificio Santa María del Mar, quedó reportado por la demandante en el "formato novedades de turnos agencia" de fls 60 y 61, 66 y 68, siendo necesario resaltar, que dicho lugar que concuerda con el sitio en donde el Sr. Erlinson Flores Ayala desempeña sus funciones de guarda de seguridad.

Actividades que denotan que el empleador ejecutó la potestad de realizar modificación a las labores inicialmente contratadas, actuar que denota la calidad subordinante de la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMÓN BOLÍVAR LTDA EN REORGANIZACIÓN en la imposición de actividades que desbordan las obligaciones contractuales pactadas en el contrato de prestación de servicios.

- También existió una exclusividad del servicio contratado a la accionada, el cual se deriva del parágrafo de la cláusula segunda, en donde se indicó: *"PROHIBICIÓN: El contratista en virtud del presente contrato se compromete a no prestar sus servicios bajo ninguna figura contractual a empresas, sociedades y afines que tengan una actividad comercial o fines sociales similares a los de la sociedad contratante en vigencia del presente contrato"* (fl. 20 del expediente digital 02) propio de una relación laboral conforme el artículo 26 del CST.
- De la prueba aportada al plenario, también se logra derivar que el único beneficiario del servicio prestado por la Sra. Astrid Lorena Valencia Arango era la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMÓN BOLÍVAR LTDA EN REORGANIZACIÓN y las labores relacionadas con la supervisión del guarda de seguridad corresponden labores que se derivan del objeto social de la demandante correspondiente a "la prestación remunerada de

servicios de vigilancia y seguridad privada...” (fl. 14 del expediente digital 09).

- Otro indicio se genera porque la testigo Lily Martínez Triana sostuvo que los “formatos de novedades para la agencia” lo hacía el Departamento de Operaciones, y como en el plenario obra prueba de los formularios diligenciados por la demandante, ello genera que se concluya que la Sra. Astrid Lorena Valencia Arango ejerciera labores administrativas desempeñadas por el Departamento de Operaciones.

Partiendo de lo expuesto, y después de ser valorada en su conjunto con base en las reglas de la **sana crítica y la libre formación del convencimiento** (art. 61 del CPL), considera la Sala que lo legal y pertinente es CONFIRMAR la sentencia de primera instancia en este punto en concreto.

## **2. Frente a la indemnización moratoria del art. 65 del CST, sanción moratoria del art. 99 de la Ley 50 de 1990**

Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado en la necesidad de analizar cada caso, pues dicha indemnización no opera de forma automática, al respecto reseñó en sentencia SL 4278 de 2022 lo siguiente:

*“Finalmente, pese a que el presente cargo se encuentra encausado por la vía de los hechos, considera la Sala necesario resaltar, que pacífico ha sido el criterio sostenido por esta Corporación, según el cual, la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del CST, no opera de forma automática frente a la conducta del empleador de sustraerse del pago de los salarios y prestaciones sociales adeudados al trabajador a la terminación del contrato de trabajo, derivando en que aquella sólo es procedente cuando quiera que el juez advierta que el empleador **no aporta razones aceptables, serias y atendibles de su conducta**, a partir del análisis conjunto de las pruebas y circunstancias que rodearon el marco de la relación de trabajo.*

*Igualmente, se debe advertir en este asunto, era el empleador quien debía asumir la carga de demostrar que actuó sin intención fraudulenta, situación delimitada por esta Corporación en la sentencia CSJ SL3288-2021, donde se expuso:*

*[...] cabe anotar que si bien es cierto en algún momento del desarrollo de su jurisprudencia esta Sala de la Corte consideró que, de cara a la imposición de la sanción por mora en el empleador incumplido existía una presunción de mala fe, ese discernimiento no es el que en la*

*actualidad orienta sus decisiones, porque, pese a que mantiene su inveterado y pacífico criterio sobre la carga del empleador para exonerarse de la sanción por mora, de probar que su conducta omisiva en el pago de salarios y prestaciones sociales al terminar el contrato estuvo asistida de buena fe, considera que ello en modo alguno supone la existencia de una presunción de mala fe, porque de las normas que regulan la señalada sanción moratoria no es dable extraer una presunción concebida en tales términos, postura que, ha dicho, se acompasa con el artículo 83 de la Carta Política.*

*En la sentencia CSJ SL3936-2018, reiterada en CSJ SL3288-2021, se consideró:*

*Por tanto, la forma contractual adoptada por las partes no es suficiente para eximir de la sanción moratoria, en la medida que, igualmente, deben ser allegados al juicio otros argumentos y elementos que respalden la presencia de una conducta conscientemente correcta.*

*Así entonces, no se advierte que el Tribunal se hubiese equivocado al imponer la sanción moratoria en este caso, pues como bien adujo no existen elementos que lleven a pensar que la demandada obró de buena fe, para desconocer los derechos mínimos de la trabajadora y dicha carga probatoria le corresponde a la accionada, **la cual no se satisface alegando el íntimo convencimiento de estar obrando en el marco de un contrato civil o comercial en el que la actora acordó prestar servicios en forma autónoma** y, mucho menos, la presencia de cuentas de cobro a título de honorarios, ya que la prueba de la buena fe, se itera, debe ser en concreto. (Negritas fuera de texto)”*

Pretende la apoderada de la sociedad demanda la absolución de las mismas, partiendo del actuar de buena fe de la empresa, al no adeudar honorarios y por tratarse de una empresa en reorganización empresarial.

Argumentos que no serán avalados por esta Corporación, bajo el entendido que no se encuentra demostrada la buena fe en el actuar de la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMÓN BOLÍVAR LTDA EN REORGANIZACIÓN, pues desde la celebración del contrato de prestación de servicios la parte accionada pudo prever la existencia de un contrato laboral, en vista que el contrato civil fue desfigurado con la inclusión de la cláusula de exclusividad; adicionalmente, la demandante ejecutó labores adicionales a las acordadas en el contrato civil, dentro de las cuales ejecutó actividades que las realizaban los supervisores, conforme quedó demostrado con el testimonio del Sr. Erlinson Flores Ayala; y la sociedad accionada contaba un área jurídica, la cual estaba a cargo de la Doctora

Vivian Andrea Torres, persona con quien la demandante tenía contacto directo, conforme fue expresado por la testigo Lily Martínez Triana.

Y el hecho de que la accionada se encuentre en proceso de reorganización y no cuente con el capital suficiente para realizar el pago de la indemnización y sanciones impuestas, no es justificación para ser absuelta del pago, teniendo en cuenta que en el certificado de existencia y representación reposa que este proceso de reorganización data del año 2016 y se constituyó la sociedad COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMÓN BOLÍVAR LTDA EN REORGANIZACIÓN en el año 2000 al plasmarse:

#### “CONSTITUCIÓN

*Por Escritura Pública No. 0003795 del 6 de junio de 2000 de Notaría 54 de Bogotá D.C., **inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de junio de 2000**, con el No. 00733666 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMÓN BOLÍVAR LTDA EN REORGANIZACIÓN.*

(...)

#### PROCESO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, ADJUDICACIÓN O LIQUIDACIÓN JUDICIAL

*Que en virtud de la ley 1116 de 2006 mediante Auto No. 430-00853 del 20 de enero de 2016, **inscrito el 9 de febrero de 2016** bajo el no. 00002806 del libro XIX, la superintendencia de sociedades, resuelve decreta la apertura al proceso de validación judicial de un acuerdo extrajudicial de reorganización a la sociedad de la referencia.*

#### *Certifica:*

*Que en virtud de la ley 1116 de 2006 mediante Acta No. 430-002514 del 10 de noviembre de 2016, inscrito el 6 de diciembre de 2016 bajo el no. 00003156 del libro XIX, la superintendencia de sociedades valida el acuerdo de reorganización de la sociedad de la referencia.”  
(Resalto de la Sala) (fl. 13 del expediente digital 09)*

En ese sentido, recuérdese que el contrato entre las partes tuvo como extremos inicial el 17 de noviembre de 2020, ello es, con posterioridad a la apertura del proceso de reorganización y a la constitución de la COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMÓN BOLÍVAR LTDA EN REORGANIZACIÓN, no siendo justificación para el incumplimiento del pago de prestaciones sociales la existencia del acuerdo de reorganización porque lo que se reveló en el presente evento fue el ocultamiento de un verdadero contrato de trabajo.

En consecuencia, se CONFIRMARÁ la decisión condenatoria de primera instancia.

Costas en esta instancia en la suma de \$1.160.000 a cargo de la sociedad demandada, por no prosperar el recurso de apelación presentado.

### DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### RESUELVE:

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia emitida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de la providencia.

**SEGUNDA:** Costas en esta instancia en la suma de \$1.160.000 a cargo de la sociedad demandada, por no prosperar el recurso de apelación presentado.

**TERCERO:** Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**



**ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ**



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**



**SECRETARÍA SALA LABORAL**  
**EDICTO VIRTUAL**

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE : ASTRID LORENA VALENCIA ARANGO  
DEMANDADOS : COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMÓN  
BOLÍVAR LTDA EN REORGANIZACIÓN  
TIPO DE PROCESO : ORDINARIO  
RADICADO NACIONAL: 05-001-31-05-019-2022-00301-01  
RADICADO INTERNO : 204-23  
DECISIÓN : CONFIRMA SENTENCIA

Magistrado Ponente  
**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN**

Fijado el 30 de agosto de 2023 a las  
8:00am

**CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**

Se desfija el 30 de agosto de 2023 a la 5:00pm

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
**SECRETARIO**